

San Miguel, siete de diciembre de dos mil veinte.

**Vistos:**

Comparece Katherine Araos Peñaloza, representante legal de la Sociedad Educacional Araos, deduciendo reclamación judicial en contra de la Resolución Exenta PA N° 000417, de 31 de agosto de 2020, dictada por el Fiscal de la Superintendencia de Educación, por orden del Superintendente de Educación, que rechaza el recurso de reclamación presentado respecto de la Resolución exenta 2018/PA/13/3783 de 26 de octubre de 2018, y modifica la sanción que le había sido aplicada, de privación temporal y parcial de la subvención general de un 1% por un mes, por la de privación parcial y temporal del 3% por tres meses, de la subvención general.

Indica que por resolución exenta N°2018/PA/13/0903, de 02 de abril de 2018, se ordenó instruir un proceso administrativo en razón de los hechos consignados en el acta de fiscalización N° 181301281, de 27 de marzo de 2018 y luego, través del acto administrativo N° 2018/FC/13/0839, de fecha 11 de mayo de 2018, se formuló a su parte el siguiente cargo: “Cargo Único: Hallazgo (100) establecimiento educacional no cumple con la normativa vigente en procedimiento de expulsión y/o cancelación de matrícula. Sustento (100.00) Establecimiento educacional no cumple con la normativa vigente en procedimiento de expulsión y/o cancelación de matrícula.”

Refiere que el hecho constatado durante la fiscalización dice relación con la expulsión o cancelación de matrícula del alumno J.S.H.C de 2° Básico, señalando que revisados los antecedentes, se le observa que la medida aplicada no se ajustó a la normativa vigente, por cuanto el Establecimiento no habría dado cumplimiento al procedimiento dispuesto en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Educación de 1998 –en adelante DFL N° 2-, “en relación a lo siguiente: a) Establecimiento envía documentación incompleta, vulnerando la normativa educacional; b) Establecimiento educacional no acredita que la medida adoptada se ajuste a su reglamento interno; c) El reglamento interno del establecimiento educacional no describe en forma específica el procedimiento para adoptar la medida disciplinaria de cancelación de matrícula; d) Establecimiento educacional no acredita que la causal aplicada para la cancelación de matrícula no se encuentra entre aquellas prohibidas por la normativa educacional; e) Establecimiento educacional no acredita que los hechos



afecten gravemente la convivencia escolar; f) Establecimiento no acredita haber representado a los padres de la inconveniencia de las conductas del estudiante; g) No consta la existencia de medidas de apoyo pedagógico o psicosociales en favor del estudiante, de forma previa a la aplicación de la medida; h) El establecimiento educacional no garantiza el debido proceso en su reglamento interno, toda vez que no otorga la posibilidad de realizar descargos o presentar pruebas; i) Establecimiento educacional no acredita que la medida haya sido adoptada por el Director del establecimiento; j) Establecimiento educacional no acredita que la medida haya sido notificada por escrito; k) El reglamento interno del Establecimiento señala un plazo inferior al de la normativa educacional para solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria, lo que vulnera la normativa vigente; l) Establecimiento educacional no cumple con el plazo correspondiente para informar a la SIE la aplicación de la medida disciplinaria, toda vez que no consta la fecha exacta en que fue notificado el apoderado sobre la medida disciplinaria aplicada.

Señala el reclamante que frente a la formulación de cargos, presentó sus descargos haciendo presente que se habían subsanado todas las observaciones, que la Superintendencia no tenía facultades para revisar la medida y que la medida, en definitiva, no se había aplicado.

No obstante los descargos, la Directora Regional de la Superintendencia de Educación (S) Región Metropolitana, confirmó el cargo en su contra por resolución N° 2018/PA/13/3783, de 26 de octubre de 2018, aplicando la sanción de multa a beneficio fiscal de privación de la subvención general del 1% por una sola vez.

Frente a la resolución adversa la recurrente dedujo reclamación administrativa fundada en el artículo 84 de la ley N° 20.529, manteniendo los argumentos que hasta ese momento había sostenido, recurso que fue rechazado por la resolución N° 417, de la Superintendencia de Educación, el 31 de agosto de 2020, resolviendo aumentar la sanción de la privación de la subvención general de un 1% por un mes, por la de privación parcial y temporal del 3% por tres meses, de la subvención general, resolución que fue suscrita por don Mauricio Irarrazabal Cerpa, fiscal, “por orden del Superintendente de Educación.”

El actor imputa al acto administrativo que lo sanciona, las siguientes ilegalidades:



1.- Ilegalidad de la delegación de facultades del Superintendente de Educación para conocer del recurso de reclamación del artículo 85 de la Ley N° 20.529. Explica que la resolución que resuelve el recurso ha sido dictada por el fiscal, señor Mauricio Irrarázaval Cerpa, en virtud de una delegación del superintendente, estimado que se ha vulnerado lo que denomina el principio de jerarquía, porque el fiscal delegado no es superior jerárquico de quien dictó la resolución que es el Director Regional de la Superintendencia de Educación Región Metropolitana. Estima vulnerados el artículo 7 del DFL N° 1, SEGPRES, 2000, que fija el texto de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que define que los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado; principio que se replica en los artículos 11, 17, 31, 32, 33, 39, y 45 de la ley citada, y también en los artículos 3 letra f), 6 y 7 letra c), 54, 61 letra f), 64 letra a) y 80, de la Ley N° 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo.

Para el recurrente en función de los artículos 99 de la Ley N° 20.529 y los artículos 1 y 2 del DFL N° 5, MINEDUC, 2012, se puede concluir que el Superintendente de Educación a nivel nacional y los Directores Regionales a nivel regional, son las máximas autoridades de la Superintendencia en su respectivo nivel territorial, con lo cual el fiscal no es una máxima autoridad territorial y por lo tanto no es un superior jerárquico del Superintendente y de los Directores Regionales, de manera que por la vía de delegación estaría revisando resoluciones de los Directores Regionales, lo que no podría hacer con imparcialidad, porque estaría contraviniendo una decisión de quien respecto de él no es su superior jerárquico.

2.- En subsidio de lo anterior, el actor solicita se rebaje la sanción en virtud del principio de la proporcionalidad, que entiende definido como el margen de discrecionalidad otorgado a los tribunales de justicia, que se debe tener en cuenta al momento de determinar la sanción aplicable a la comisión de una infracción.

Da cuenta también que conforme a los antecedentes aportados, ha modificado su reglamento interno incorporando la modificación exigida por la fiscalizadora.

Finalmente, se hace cargo de alegar la existencia de la prohibición *reformatio in peius*, principio que “impide al órgano reformar la sentencia en



perjuicio de una parte si ello no ha sido pedido en el arbitrio de alguna de las partes...” haciendo presente que así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia en fallo de 17 de julio de 2019, en causa Rol N° 26.593-2018.

Termina el actor su libelo, pidiendo se deje sin efecto la resolución impugnada o en subsidio se rebaje la sanción, con costas.

Informando al tenor del reclamo, la Superintendencia de Educación solicita su rechazo, con costas. Al efecto, se refiere en primer término, a los antecedentes del proceso administrativo sancionador que culminó con la resolución que rechazó la reclamación administrativa, sustituyendo la sanción originalmente aplicada pasando de la privación de la subvención general de un 1% por un mes, por la de privación parcial y temporal del 3% por tres meses, de la subvención general, tal cual como explica la recurrente.

Luego, se refiere al artículo 6 del DFL N° 2, de 1998, Ley de Subvenciones, y a los requisitos para que los establecimientos de enseñanza gocen del beneficio de la subvención, entre ellos, la necesidad de contar con un reglamento interno que establezca sanciones o medidas disciplinarias, para cuya aplicación debe cumplirse con lo que dicha norma prescribe, cuya infracción se califica de grave por la misma regla.

Respecto a las infracciones constatadas, hace presente que la recurrente no controvertió el hecho de haber cometido la infracción, de manera que se confirmó que la reclamante incurrió en una infracción grave conforme al artículo 6 del DFL N° 2, MINEDUC, 1998 y 76 letra i) de la Ley N° 20.529, que enumera las infracciones graves, indicando las de los artículos 3°, 3° bis y 6° del DFL citado, por lo que entiende que la sanción está correctamente aplicada.

Haciéndose cargo de los argumentos de la recurrente la Superintendencia expresa:

1.- En cuanto a la ilegalidad de la delegación, hace presente que quien firmó la resolución recurrida fue el Fiscal de la Superintendencia de Educación y no el fiscal de instrucción del proceso sancionatorio, de manera que, el fiscal Sr. Mauricio Irrázaval Cerpa es un funcionario de la planta directiva de la Superintendencia de Educación, con desempeño en la División Jurídica, que corresponde al segundo nivel jerárquico de la institución, por lo que entiende que la recurrente yerra en la persona y calidad de quien firmó la resolución recurrida



2.- En cuanto a la facultad del Superintendente para delegar, expresa que esta facultad está contenida en el artículo 100 letra e) de la Ley N° 20.529, que le otorga la facultad de “Delegar las atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley”, cuestión que ha sido hecha presente por el propio recurrente. En el mismo sentido, recuerda que conforme al artículo 43 de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece los requisitos de la delegación, éstos se han cumplido en la especie. Finalmente, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que se ha pronunciado previamente sobre la validez de las sanciones aplicadas por la misma autoridad delegada.

3.- En cuanto a la rebaja de la sanción aplicada fundada en la proporcionalidad y a la *reformatio in peius*, afirma que:

a. Respecto a la infracción grave cometida por el sostenedor, explica que tuvo como fundamento la vulneración de la normativa educacional al aplicarse la medida de cancelación de matrícula al alumno de 2° básico, confirmándose que el establecimiento infringió diversas disposiciones de la normativa reguladora de los procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula, todo ello en coincidencia con lo expuesto por la recurrente y detallado supra.

Plantea que los hechos descritos han sido expresamente calificados por el legislador como infracciones graves, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 letra i) de la ley N°20.529 y la letra d) del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación; calificación no controvertida en autos. Por su parte, sostiene que, la Ley N° 20.529, define que este tipo de infracciones puede ser sancionada mediante la privación parcial y temporal de subvención, en conformidad al artículo 73 letra c).

Hace presente, que la calificación de “grave” de la infracción cometida, obedece a los bienes jurídicos afectados al vulnerarse la normativa reguladora de la medida de cancelación de matrícula y expulsión y el interés público en el cumplimiento de dicha norma.

Señala que el Servicio motivó en detalle las circunstancias que permitieron definir el quantum de la sanción en el caso concreto, a saber:



- No haberse acompañado medios de prueba en el recurso de reclamación que hayan permitido tener por desvirtuados o corregidos los hechos constatados en el acta de fiscalización.

- La proporcionalidad entre la sanción aplicada y la gravedad del hecho, habida consideración de los bienes jurídicos afectados con ocasión de la infracción (debido proceso, no discriminación y permanencia en el sistema educativo).

- Las circunstancias establecidas en el artículo 73 letra b) de la Ley N° 20.529, en específico, la concurrencia de la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 79 letra b) de la Ley 20.529, por no haber sido sancionado el sostenedor con anterioridad.

- El deber del Superintendente de aplicar la sanción legalmente procedente, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 y 100 letra i) del mismo cuerpo legal.

En lo concerniente a la modificación del reglamento interno señalada por el sostenedor, expresa que no es efectivo o al menos no lo acreditó en el proceso administrativo.

Así, estima que la resolución dictada por el Superintendente no adolece de ilegalidad alguna. La sanción de privación de subvención general se encuentra dentro del rango de sanciones aplicable para este tipo de infracción grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 letra c) de la Ley N°20.529, resultando proporcional y adecuada a la entidad de la infracción.

b. El pronunciamiento del Superintendente está supeditado a la satisfacción del interés general, esto es, “fiscalizar de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 20.529, que señala que “la obligación de la Administración no va dirigida a declarar el derecho aplicable a cada caso concreto, sino que más bien a dar satisfacción oportuna y eficaz a los intereses generales que debe cautelar”.

Estima que la Superintendencia de Educación se constituye como una agencia de aseguramiento de la calidad, informando, evaluando, fiscalizando, interpretando normas y sancionando, cuando así corresponda, de manera que ella ha actuado en cumplimiento de un mandato legal.



c. La reclamación del artículo 84 de la ley N°20.529 es uno de los mecanismos de control jerárquico ejercido por el Superintendente en su calidad de Jefe Superior del Servicio. El Superintendente de Educación no está limitado por lo resuelto por la autoridad regional y puede modificar el quantum de la sanción en caso de ser necesario, por cuanto: i) la Superintendencia de Educación es una institución desconcentrada territorialmente en Direcciones Regionales, siendo el Superintendente el Jefe Superior de este Servicio, en conformidad al art. 99 y 101 de la Ley SAC; ii) Los recursos administrativos son una expresión del Principio de Control presente en la Administración y en nuestra legislación. Este Principio de Control está plasmado de manera extensiva en la Ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, en su art. 11, a partir de él, se desprende que la resolución del Superintendente no queda supeditada a la sanción aplicada por la Dirección Regional, sino que por el contrario, la potestad sancionatoria del Superintendente se traduce en poder revisar la decisión de la Autoridad Regional, siendo éste uno de los mecanismos de control jerárquico ejercido por el Superintendente en su calidad de Jefe Superior del Servicio; iii) el Superintendente según el art. 100 letra i) citado, tiene facultades sancionatorias autónomas, las que no tendrían sentido si se le priva, al mismo tiempo, de poder revisar y aplicar una sanción distinta a la determinada por la Dirección Regional; y iv) atendido que las Direcciones Regionales son de jerarquía inferior a la del Superintendente, de seguir lo planteado por el sostenedor se traduciría en que dicha Autoridad tendría una facultad sancionatoria mayor que la de su propio superior jerárquico, cuestión que es improcedente en materia administrativa.

d. En relación a la vulneración del art. 41 de la Ley 19.880, denunciada, hace presente que el procedimiento sancionatorio substanciado por este Servicio es de carácter especial, expresamente regulado en el párrafo 5° del título III de la Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad, explicitándose que procederá en caso de detectarse “infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional”. De tal manera, al ser un procedimiento específico, no resulta aplicable la prohibición de la reforma en perjuicio del art. 41 precitado, al estar expresamente reglado por el legislador. Señala también, que si bien es reconocida la aplicación supletoria de la Ley 19.880, ésta se encuentra limitada en el caso sub judice,



en la medida que, la materia a la cual pretende emplearse no haya sido prevista en el ordenamiento administrativo. Esto es, atendiendo al objeto específico de la Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Ley 19.880 debe ser conciliable con la naturaleza de este 15 Art. 66 inc. 1° de la Ley 20.529., en cuanto a: (1) no entorpecer sus etapas y mecanismos, y (2) no afectar el propósito del procedimiento especial. En este mismo sentido lo ha comprendido la Contraloría General de la República. De tal forma, la aplicación de las normas contenidas en la Ley 19.880 a los procedimientos sancionatorios es procedente, sólo en la medida que se respeten dichos límites señalados, habida consideración de que doctrinariamente se ha reconocido que en materia sancionatoria debe ser matizada. Por otro lado, el procedimiento sancionatorio instruido al amparo de la Ley SAC es diametralmente distinto, en cuanto a lo formal y a lo sustantivo. En cuanto a lo formal, contiene etapas y mecanismos claramente definidos por el legislador.

En este curso de ideas, la Contraloría General de la República en diversos dictámenes relativos al procedimiento sancionatorio en materia educacional regulado en la Ley de Subvenciones (procedimiento antecesor a la entrada en vigencia de la Ley 20.529 que reemplazó dicha regulación), ha precisado la inaplicabilidad de la Ley 19.880, como también del referido artículo 41, en atención de que el proceso sancionatorio educacional ya se encontraba especialmente regulado por el legislador.

De esta manera, considerando tanto el aspecto formal, como el sustantivo, dicho procedimiento no contiene vacíos que eventualmente hagan procedente la aplicación supletoria del artículo 41 de la Ley 19.880.

A mayor abundamiento, aun si se considerara aplicable esta disposición a los procesos administrativos sancionatorios substanciados por la Superintendencia de Educación, el supuesto de la norma no concurre en el caso de la reclamación del art. 84 de la ley 20.529, ya que dicho reclamo no se presenta a “solicitud” del sostenedor, ni tampoco es un procedimiento independiente del regulado en los artículos 66 y siguientes de la ley 20.529, al contrario, la reclamación administrativa es parte del proceso sancionatorio, encontrándose regulada en el párrafo que regula las normas del proceso sancionatorio del cual este Servicio está facultado para instruir (párrafo 5°, Título III Ley 20.529). Se refuerza lo anterior con la regulación del recurso de reclamación judicial del art. 85 de la Ley 20.529, el cual sólo procede en





contra de la resolución del Superintendente que se pronuncia sobre la reclamación administrativa presentada en el proceso sancionatorio, la cual deja ejecutoriado el proceso sancionatorio. Así, habiéndose deducido la reclamación administrativa ante la decisión de la Dirección Regional por parte del sostenedor, resulta evidente que este pronunciamiento (el del Superintendente) es el que agota la vía administrativa del proceso sancionatorio, permitiéndose recurrir judicialmente de dicha resolución; cuestión que no ocurre con la resolución dictada por la Autoridad Regional de este Servicio.

Finalmente, hacer presente que a nivel reglamentario esta materia también ha sido zanjada, en el art. 3 letra k) del DS N°369 (2017), por cuanto es la propia normativa educacional la que determina que la reclamación administrativa es una etapa adicional del proceso sancionatorio, el cual recién se encontrará terminado o afinado, cuando se haya notificado la resolución del Superintendente que se pronuncia sobre esta reclamación administrativa, si es que ha sido eventualmente deducida.

Termina, declarando que es forzoso concluir, que tanto el proceso administrativo, así como la resolución exenta que se recurre en el presente proceso, se han dictado con estricta observancia a la normativa educacional vigente, debiendo esta Ilustrísima Corte, proceder al rechazo del recurso de reclamación incoado, por cuanto el sostenedor infringió las disposiciones legales y normativas.

Solicita tener por informado el recurso de reclamación materia de autos, y en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas; además acompaña copia del expediente de tramitación del proceso administrativo y Mandato Judicial de fecha 5 de octubre de 2020.

Con estos antecedentes se trajeron los autos en relación, procediéndose a la vista de la causa.

**Con lo relacionado y considerando:**

**PRIMERO:** Que, según el artículo 85 inciso primero de la Ley 20.520: “...Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de un plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin



efecto...”. Por lo tanto, la competencia de esta Corte de Apelaciones se circunscribe a la revisión judicial del acto administrativo, a fin de verificar si en la resolución reclamada se incurrió en alguna ilegalidad que justifique dejarla sin efecto.

**SEGUNDO:** Que, examinadas las alegaciones y argumentos vertidos por reclamante y reclamada en sus correspondientes escritos, se advierte que son coincidentes en lo referente a la existencia y fecha de la resolución administrativa impugnada y los actos de esa índole que la precedieron, lo que permite dar por establecido:

Que, por resolución exenta N°2018/PA/13/0903, de 02 de abril de 2018, se ordenó instruir un proceso administrativo en razón de los hechos consignados en el acta de fiscalización N° 181301281, de 27 de marzo de 2018 y luego, través del acto administrativo N° 2018/FC/13/0839, de fecha 11 de mayo de 2018, se formuló a su parte el siguiente cargo: “Cargo Único: Hallazgo (100) establecimiento educacional no cumple con la normativa vigente en procedimiento de expulsión y/o cancelación de matrícula. Sustento (100.00) Establecimiento educacional no cumple con la normativa vigente en procedimiento de expulsión y/o cancelación de matrícula”, a la Sociedad Educacional Araos.

Los hechos motivo de la sanción dicen relación con la cancelación de la matrícula del alumno J.S.H.C de 2° Básico, estableciéndose en el expediente administrativo que el Establecimiento no habría dado cumplimiento al procedimiento dispuesto en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Educación de 1998 –en adelante DFL N° 2-, “en relación a lo siguiente: a) Establecimiento envía documentación incompleta, vulnerando la normativa educacional; b) Establecimiento educacional no acredita que la medida adoptada se ajuste a su reglamento interno; c) El reglamento interno del establecimiento educacional no describe en forma específica el procedimiento para adoptar la medida disciplinaria de cancelación de matrícula; d) Establecimiento educacional no acredita que la causal aplicada para la cancelación de matrícula no se encuentra entre aquellas prohibidas por la normativa educacional; e) Establecimiento educacional no acredita que los hechos afecten gravemente la convivencia escolar; f) Establecimiento no acredita haber representado a los padres de la inconveniencia de las conductas del estudiante; g) No consta la existencia de



medidas de apoyo pedagógico o psicosociales en favor del estudiante, de forma previa a la aplicación de la medida; h) El establecimiento educacional no garantiza el debido proceso en s reglamento interno, toda vez que no otorga la posibilidad de realizar descargos o presentar pruebas; i) Establecimiento educacional no acredita que la medida haya sido adoptada por el Director del establecimiento; j) Establecimiento educacional no acredita que la medida haya sido notificada por escrito; k) El reglamento interno del Establecimiento señala un plazo inferior al de la normativa educacional para solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria, lo que vulnera la normativa vigente; l) Establecimiento educacional no cumple con el plazo correspondiente para informar a la SIE la aplicación de la medida disciplinaria, toda vez que no consta la fecha exacta en que fue notificado el apoderado sobre la medida disciplinaria aplicada.”

Que, frente a la formulación de cargos, se presentaron los correspondientes descargos, no obstante ello, la Directora Regional de la Superintendencia de Educación (S) Región Metropolitana, confirmó el cargo por resolución N° 2018/PA/13/3783, de 26 de octubre de 2018, aplicando la sanción de multa a beneficio fiscal de privación de la subvención general del 1% por una sola vez.

Que, la recurrente dedujo reclamación administrativa fundada en el artículo 84 de la ley N° 20.529, recurso que fue rechazado por la resolución N° 416, de la Superintendencia de Educación, el 31 de agosto de 2020, resolviendo aumentar la sanción de un 1%, por la de privación parcial y temporal del 3% por tres meses, de la subvención general, resolución que fue suscrita por don Mauricio Irarrazabal Cerpa, fiscal, “por orden del Superintendente de Educación.”

Que, frente a la resolución indicada, se dedujo la acción que actualmente nos ocupa.

**TERCERO:** Que, si bien las partes no han controvertido los hechos, en lo central, han acompañado a estos autos, Copia de la resolución exenta PAN° 416, de 31 de agosto de 2020, que rechaza la reclamación administrativa; copia del correo electrónico que notifica a la Sociedad Educacional Araos, de la resolución antedicha; y, copia del expediente administrativo, respectivo. Ningún documento ha sido objetado de contrario.



**CUARTO:** Que, las objeciones que plantea el actor en relación a la falta de legitimidad de la resolución que lo sanciona, por improcedencia de la delegación efectuada por el superintendente de educación en el fiscal de la propia superintendencia, no pueden ser atendidas, ya que, por una parte el superintendente posee la atribución para delegar, tal cual se la atribuye el artículo 100 letra e) de la Ley N° 20.529, que le otorga la facultad de “Delegar las atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley” y por otra, aunque no tuviese esa atribución expresa, en virtud del artículo 43 de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, se establecen los requisitos de la delegación, los que se han cumplido en la especie, al ser el delegado una autoridad dependiente del delegante, actuar dentro de su competencia y tratarse de una atribución específica.

En el mismo sentido anterior, aunque desde otra perspectiva, no son atendibles las alegaciones del recurrente en cuanto a haberse vulnerado el principio de jerarquía en la revisión de los actos administrativos, puesto que el fiscal delegado, lo es de la superintendencia y no de la Dirección Regional; con lo cual, no puede sostenerse que el referido fiscal sea una autoridad dependiente del Director Regional, ni se afecte su imparcialidad puesto que depende del Director Nacional. En consecuencia, al haber fallado los supuestos materiales de la alegación que se intenta debe rechazarse.

**QUINTO:** Que, a la luz de lo expuesto en los motivos que preceden, se observa que efectivamente existieron las contravenciones que motivaron el expediente administrativo y que debe darse por establecido que el establecimiento pretendió la expulsión o cancelación de matrícula del alumno J.S.H.C de 2° Básico, sin haber dado cumplimiento a las exigencias legales establecidas para ello, todo lo cual, generó el cargo que se le dirigió a la actora, concluyendo con la decisión de la Dirección Regional Metropolitana de Educación de imponerle una sanción, consistente en la pérdida por una vez del 1% de la subvención, la que fue aumentada por la Superintendencia del ramo, resolviendo acción de reclamación administrativa; todo ello, sin que de parte del establecimiento educacional se hayan aportado elementos de juicio o probanzas que permiten desvirtuar los hechos que se le imputaron y sancionaron durante el procedimiento administrativo;



**SEXTO:** Que, por lo expuesto, se observa que estando debidamente fundada y acreditada la existencia de la infracción de que se trata, no hay vicio de ilegalidad que justifique el acogimiento de lo solicitado de manera principal, en el sentido de dejar sin efecto el proceso administrativo que redundó en la resolución impugnada, por lo que esa pretensión debe ser desestimada.

**SÉPTIMO:** Que, en lo que dice relación con la petición subsidiaria de la modificación de la sanción impuesta en la resolución reclamada, es necesario aclarar si la Superintendencia de Educación estaba en situación de modificar la sanción impuesta por la autoridad regional de dicha cartera de Gobierno, en orden a agravar la situación con la que el sancionado se presentó a plantear la reclamación administrativa, como ha ocurrido en el presente caso, en que la sanción original de privación parcial de la subvención general del 1% por un mes, fue sustituida por la privación parcial y temporal del 3% de la referida prestación, por tres meses.

Al respecto, cabe considerar que el procedimiento administrativo sancionador corresponde al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la autoridad administrativa con ocasión del conocimiento de hechos u omisiones constitutivos de infracciones a la normativa –educacional en este caso-, con el objeto de investigar y adoptar las medidas pertinentes. Se trata de una controversia entre la Administración y el administrado que culmina con el acto administrativo que resuelve el procedimiento vía aplicación de una medida sancionatoria, si los antecedentes lo ameritan.

Otro aspecto que es relevante, en este orden de reflexiones, es que el procedimiento administrativo sancionador se originó al haberle sido atribuida una contravención a la normativa educacional, no por alguna solicitud del establecimiento o su sostenedor y el resultado de esa vía administrativa de fiscalización terminó en la imposición de una sanción. Sin embargo, lo pertinente a la actuación del Superintendente de Educación, en cuanto órgano resolutor de la revisión administrativa recaída en la sanción aplicada por la autoridad regional es que sí se originó por una solicitud del sancionado: la reclamación y, ésta se formuló sobre la base de la sanción consistente en la privación temporal y parcial del 1% de la subvención general, por un mes.

Ahora bien, es indudable que la actuación de la Superintendencia de Educación cobra vigor sólo en la medida que intervenga la reclamación del



afectado por el acto de la Dirección Regional respectiva, motivo por el que no es indiferente considerar qué es lo concretamente pedido por el reclamante, puesto que de ello dependerá la competencia del Superintendente, razón que de inmediato lleva a concluir que este último estará jurídicamente impedido de avanzar más allá de lo solicitado en el reclamo, particularmente en lo que pueda dejar al reclamante en una posición desmedrada en comparación con aquella que tenía al momento de incoar su pronunciamiento. En otras palabras, el resultado del reclamo administrativo no podrá ir en perjuicio del único interés que lo sostiene.

Consistente con lo expuesto, la uniformidad de la doctrina acepta o más bien exige la aplicación supletoria de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, dentro de los cuales la *reformatio in peius*, es un baluarte de la protección de los derechos del perseguido penalmente, sin que se vean razones para no aplicarlo en la especie. Asimismo, la Excma. Corte Suprema ha dicho: “Así pues, la autoridad sancionatoria debe cumplir el fin por el cual se tramitan los procedimientos administrativos, que no es otro que el de investigar y constatar la existencia de incumplimientos a la normativa educacional que puedan incluso dar origen a sanciones administrativas; sin embargo no resulta plausible que la Superintendencia pueda cambiar la decisión de la autoridad regional en detrimento del que la impugnó, tanto más cuanto que el ejercicio de las potestades de la Superintendencia de Educación dentro del procedimiento sancionador, surgen en este caso a solicitud del infractor con motivo de las sanciones aplicadas en su contra por la autoridad regional, razón por la cual la resolución de la Superintendencia, debe ajustarse a las peticiones formuladas por el afectado con la sanción administrativa”. Y añade el alto tribunal –también con nítida ligazón con el presente caso- “(...) Que no resulta ser óbice a lo concluido, la circunstancia del eventual error de la autoridad regional en la determinación de las sanciones, toda vez que la Administración goza de las facultades que le permiten privar de sus efectos a un acto contrario a derecho.” (SCS causa ingreso N° 23.098-2019).

En cuanto a la argumentación de la Superintendencia de que estaría teniendo menos atribuciones que los Directores Regionales y que se menoscabarían sus facultades, ello no es efectivo, puesto que como cabeza de la organización puede dictar las normas específicas que estime



conveniente para uniformar la sanción que deben aplicar sus subordinados, con ello, estandariza los parámetros de la sanción y deja incólume el derecho del administrado para pedir la revisión del actor hasta agotar la vía administrativa.

Finalmente, sobre este punto, cabe advertir, que no existe norma expresa que permita al Superintendente aumentar la sanción impuesta, al resolver una reclamación administrativa, por lo que, no se ve argumento convincente capaz de desvirtuar el análisis que se ha realizado supra.

**OCTAVO:** Que, por todo lo razonado, se debe concluir que la sanción administrativa elevada por la Superintendencia de Educación en la resolución impugnada en autos, en perjuicio del administrado y reclamante, no es procedente, razón que conducirá a hacer lugar al reclamo en estudio en este ámbito.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 20.529, **se acoge** parcialmente la reclamación deducida por la Sociedad Educacional Araos en contra de la Superintendencia de Educación y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución exenta N° 417, de 31 de agosto de 2020, sólo en la parte que modifica la sanción aplicada a la actora y, en su lugar, se dispone que la misma queda fijada en la privación temporal y parcial de la subvención general de un 1% por un mes, de conformidad a lo resuelto originalmente por la Resolución exenta N° 2018/PA/13/3783, de 26 de octubre de 2018, de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marco Arellano Quiroz.

#### **N° 46-2020 Contencioso Administrativo**

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por las ministras señora María Alejandra Pizarro Soto y señora Dora Mondaca Rosales y el Abogado Integrante señor Marco Arellano Quiroz. No firma la ministra señora Mondaca ni el Abogado Integrante señor Arellano, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausentes.



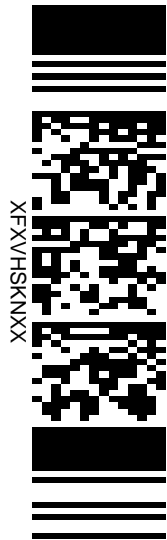


XFVHSHKNXX



Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel.

En San miguel, a siete de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>